



## RESUMEN Y PROSPECTIVA

- **El Cartel de Sinaloa (CDS) envía mensaje mediático con su entrada triunfal en San Gregorio Chamic (Chiapas) para generar una respuesta inmediata del gobierno federal que obligó a replegarse al CJNG** (p. 3). Las imágenes en las que la base social del CDS recibe con aplausos y vítores a cerca de 20 camionetas artilladas artesanalmente, y con hombres armados, tuvieron un alto impacto mediático, y generaron la inmediata movilización de fuerzas conjuntas del ejército, GN y policía estatal hacia la región de la sierra en Chiapas. El episodio tuvo lugar en una comunidad donde el CDS tiene base social desde hace varios años, y forma parte de una ruta bajo su control hacia La Trinitaria y Comitán. En esta zona al menos los bloqueos realizados en las últimas tres semanas fueron propiciados por el CDS para demostrar su control. Es altamente probable que la violencia escale porque el CJNG mantiene presencia en varios municipios de la región desde donde intentará recuperar posiciones.
- **Levantón de la alcaldesa de Cotija revela disputa territorial entre organizaciones criminales e intentos de cooptación de autoridades** (p. 7). El pasado 23 de septiembre fue levantada la alcaldesa de Cotija, Michoacán después de salir de una plaza comercial en Zapopan, Jalisco, por un grupo de personas armadas. Se presume que se trató del Cártel Jalisco Nueva Generación, que en meses pasados amenazó a la alcaldesa e intentó imponer a miembros de la organización en la Dirección de Seguridad Pública Municipal para hacer frente a los conflictos que sostiene con diferentes organizaciones criminales en la región. Aunque la alcaldesa ya fue liberada, este evento es preocupante porque da cuenta de la necesidad de esta organización de utilizar el aparato estatal para conseguir sus objetivos; es probable que intentos de cooptación de autoridades sucedan con mayor frecuencia en los próximos meses en la región, y que incluso haya intentos por participar en las elecciones del 2024.
- **Supuesto intento de arresto de Jesús Alfredo Guzmán 'El Alfredillo' perfila detenciones de jefes operativos del Cártel de Sinaloa** (p. 8). El intento no confirmado de detención de Jesús Alfredo Guzmán Salazar del pasado 23 de septiembre apunta a una colaboración muy enérgica por parte de las fuerzas federales de seguridad mexicana para responder al llamado de la Fiscalía General de EE.UU. de extraditar a los demás hermanos de Ovidio Guzmán. De manera paralela al control militar que el gobierno mexicano ha retomado de la zona de Frontera Comalapa en Chiapas, estos días se han registrado

operativos intensos por parte del Ejército y Guardia Nacional por mostrar su poderío en la zona de Badiraguato y Culiacán. En espera de la confirmación del operativo fallido, estimamos que es probable que, en semanas próximas, el gobierno mexicano capture a varios elementos pertenecientes al Cártel de Sinaloa y enlistados entre los más buscados por la DEA.

- **Víctimas mutiladas en el área metropolitana de Monterrey son consecuencia de la expansión del Cártel del Noreste (CDN) en Nuevo León** (p. 9). Esta semana fueron abandonadas 12 cabezas humanas en diferentes zonas de Monterrey acompañadas de mensajes y amenazas atribuidas al CDN. Esta organización realizó una “purga” interna y presumiblemente asesinó a colaboradores del Cártel de Sinaloa que les espiaban y compartían información con Los Zambada. Luego de los hechos de violencia, las fuerzas de seguridad redoblaron su presencia en Nuevo León, lo que ha provocado diversos enfrentamientos y bloqueos en las principales carreteras que rodean el área metropolitana. La mafia del CDN se ha expandido desde Tamaulipas, en los últimos años, y ahora compite con el CDS por el control de la ciudad. Advertimos que la violencia en Monterrey se incrementará en las siguientes semanas, pues el CDN buscará dominar un punto estratégico en la región noreste de México.
- **El secuestro de siete jóvenes y asesinato de seis de ellos en Zacatecas afianza la teoría del reclutamiento de civiles por parte de grupos criminales y vuelve a evidenciar la violencia en la entidad** (p. 12). El 24 de septiembre siete jóvenes fueron secuestrados en el Rancho El Potrerito, municipio de Villanueva, según versiones de testigos, por un comando armado que ingresó durante la madrugada. La autoridad montó un operativo con 300 militares, policías estatales y elementos de la Guardia Nacional. El miércoles 27 fueron hallados los seis cadáveres en una zona serrana de difícil acceso, sólo uno de ellos fue encontrado con vida. La Fiscalía General del estado dijo que tenían reportes de criminales que reclutaban jóvenes a la fuerza en la entidad. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se debían adelantar hechos hasta tener más información. Sin embargo, por no ser la primera vez que un secuestro como éste sucede (apenas en agosto, un hecho similar ocurrió en Lagos de Moreno, Jalisco). La probabilidad de que grupos armados recluten civiles inocentes se hace más evidente. Además, este caso vuelve a poner en el ojo público la violencia que se vive en la entidad, a pesar de los supuestos esfuerzos que el gobierno ha realizado para erradicarla. El afianzamiento tanto del CDS como del CJNG en Zacatecas (dada su importancia geográfica), impedirá que la violencia pueda ser erradicada, o al menos disminuida, en el corto y mediano plazos.
- **Tabasco está en riesgo de una crisis prolongada de inseguridad por crecientes riesgos criminales e incapacidad de las autoridades para enfrentarlos** (p. 14). El 22 de septiembre se registraron múltiples incidentes de violencia en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo tras la captura de un líder criminal del CJNG. La presencia y actividad

criminal en el estado no es reciente (grupos criminales cuentan con robustas estructuras en su territorio), pero fueron minimizadas por las autoridades para no perjudicar la construcción de la refinería Dos Bocas. Sin un cambio de estrategia, esperamos que la violencia en el estado continúe al alza.

- **Puebla muestra un panorama general de deterioro en indicadores de seguridad pública, solo en el 18% de los indicadores revisados se observa una tendencia a la baja** (p. 15). Lantia Intelligence presenta un análisis de los principales indicadores de seguridad pública en Puebla entre 2014 y 2023. Los hallazgos muestran mejoras en la percepción de confianza y el desempeño de las autoridades estatales de seguridad como la policía estatal y la policía ministerial o judicial. La percepción de inseguridad en Puebla baja de 89.9% en 2020 a 79.3% en 2023. Con relación a indicadores de violencia y conflictividad, se observa que las víctimas letales del crimen organizado reflejan una tendencia al alza, al igual que la trata de personas y las movilizaciones o marchas. Entre los delitos con una tendencia a la baja, y que también esperamos que disminuyan para 2023, encontramos los siguientes: homicidio culposo, lesiones culposas, delitos electorales, evasión de presos, y delitos contra la libertad personal (secuestro y otros). Los indicadores con tendencia al alza y que probablemente aumentarán en 2023 son los siguientes: robo a casa habitación, robo a institución bancaria, robo a transeúnte, robo a transportista, robo de autopartes, robo de vehículo automotor, robo en transporte individual, robo en transporte público colectivo, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, violencia familiar, corrupción de menores, trata de personas, feminicidio, amenazas, falsedad, delitos contra la libertad y la seguridad sexual (delitos sexuales), en el total de delitos (carpetas de investigación), eventos de alto perfil, bloqueos en vías de comunicación, rafagueos, y personas desaparecidas.

## ANÁLISIS



### Intensa disputa entre carteles pone en estado de sitio durante tres semanas a municipios de la Sierra de Mariscal en Chiapas

#### RIESGO DE SEGURIDAD

Durante esta semana ocurrió una crisis por la violencia acumulada en semanas previas por bloqueos y enfrentamientos reportados entre integrantes del CDS y del CJNG en la región sierra de Chiapas. A partir del sábado 23 de septiembre, el CDS ejecutó la última parte de una maniobra de concentración de fuerzas en Chiapas, con sicarios procedentes de Zacatecas y Durango (zonas de reclutamiento), para sitiar la ciudad de Frontera Comalapa, amenazar con entrar a la ciudad, y obligar a una respuesta de la autoridad federal. Con esta maniobra el CDS se reposicionó en la zona norte del municipio sobre la carretera Panamericana con dirección hacia La Trinitaria y Comitán. Además, logró replegar momentáneamente a los integrantes del CJNG hacia las zonas despobladas de la sierra en la frontera con Guate-

mala, ante la presencia de 2 mil 300 elementos combinados del Ejército, GN y policía estatal. En fuentes abiertas se menciona un repliegue de fuerzas de ambos cárteles. Por las características de la estrategia desplegada, y por la cantidad de elementos con que cuenta el CJNG en los municipios de Chiapas, es altamente probable que haya nuevos episodios de violencia para recuperar los territorios hoy momentáneamente recuperados por la autoridad.

Desde la primera semana de septiembre comenzaron a reportarse bloqueos de carreteras, tanto por parte del crimen organizado como por organizaciones de transportistas y algunas organizaciones de autodefensas. Estos bloqueos se extendieron por toda la región de la sierra y generaron confusión, ya que no tuvieron un origen único. En particular los bloqueos en la zona norte de Frontera Comalapa fueron parte de una estrategia implementada por el CDS para poner presión sobre los municipios de Frontera Comalapa y Motozintla donde el CJNG había concentrado capacidad de fuego.

Esta estrategia de sitiar la zona generó escasez de alimentos, cortes del servicio eléctrico y telefonía, suspensión de actividades escolares, cierre de tiendas de autoservicio y bancos, y pérdidas en transportación de perecederos con destino a la frontera que hicieron crisis justo a partir del sábado 23 de septiembre. Ese mismo día, el CDS hizo acopio de mayor fuerza operativa, y procedió a organizar la supuesta entrada hacia Frontera Comalapa, eliminando los bloqueos y entrando como liberadores de la zona, con las imágenes de personas aplaudiendo su llegada en San Gregorio Chamic. Sin embargo, decidieron no entrar a la cabecera municipal y evitar una confrontación directa. Esta presión con bloqueos se realizó también sobre Motozintla, pero ahí la llegada de la autoridad ha sido más lenta y aún no se logra normalizar la situación. A continuación, se presenta una crónica e interpretación de los hechos acontecidos en la semana de reporte:

- El sábado 23 de septiembre la Diócesis de San Cristóbal de las Casas emitió un comunicado firmado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez denominado “Chiapas desgarrado por el crimen organizado” donde señala que los grupos delincuenciales se han apoderado del territorio, imponiendo un estado de sitio donde obligan a las personas y familias a apoyarlos bajo amenazas de secuestro o desapariciones. Reiteran que el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y muestra un estado fallido y rebasado o coludido con los grupos delincuenciales. Denuncian persecución a la sociedad civil que es obligada a tomar partido por uno u otro grupo criminal. Exigen la atención urgente a la situación de violencia, y que se restablezca el orden social sin vulnerar a la sociedad civil.
- El sábado 23 de septiembre comenzaron a viralizarse en redes sociales imágenes tomadas en la carretera Panamericana en un tramo de 8 kilómetros entre San Gregorio Chamic y Selegua (a 38 km de Frontera Comalapa), donde un grupo de pobladores aplaudían al paso de un convoy con al menos 20 camionetas con blindaje artesanal y hombres armados, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes vitoreando vivas a Sinaloa y al Mayo Zambada, prometieron “liberarlos” de otros grupos delictivos. En la comunidad de San Gregorio Chamic que pertenece al municipio de Frontera Comalapa, se ubica

uno de los bastiones del CDS en su zona de influencia que va hacia La Trinitaria, y Comitán.

- En fuentes abiertas se difundió que los hombres armados llegaron procedentes de Zacatecas y Durango, también se menciona que había guatemaltecos. El desbloqueo de estos caminos anunciados por los integrantes del CDS fue sobre un tramo de unos 40 kilómetros desde San Gregorio Chamic hasta la cabecera municipal de La Trinitaria. Estos bloqueos habían afectado a transportistas de distintos estados del país con productos perecederos (cerdo y huevo), para abastecer la zona fronteriza. Los bloqueos los realizó el propio CDS para presionar a la población de Frontera Comalapa, y con ello apresurar la salida de los integrantes del CJNG que se encontraban en esa ciudad.
- No hay reportes de enfrentamientos, ni bajas, producto de la eliminación de los bloqueos, ni de la entrada del CDS a Chamic; pese a lo anunciado durante el desfile de camionetas el convoy nunca llegó a Frontera Comalapa. Se señala en fuentes abiertas que los integrantes del CDS determinaron replegarse a las comunidades de Cristóbal Colón, Santa Rosa de Lima, Ciudad Cuauhtémoc y Paso Hondo, mientras que los integrantes del CJNG movieron posiciones hacia el sur, a las poblaciones de Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Nuevo Paraíso y Motozintla.
- El domingo 24 de septiembre integrantes del Cártel de Sinaloa recorrieron en vehículos los municipios de Siltepec y La Grandeza, en busca de integrantes del CJNG, y colocaron montículos de tierra en las carreteras para bloquear el paso de unidades de sus enemigos.
- También el domingo 24 de septiembre en Chicomuselo, se denunció que miembros de la organización MAIZ, ligada al CJNG, mantuvieron retenes en los accesos a la cabecera municipal y se colocaron cartulinas para pedir: “No queremos que Chicomuselo se convierta en otro Comalapa”.
- El 25 de septiembre el presidente López Obrador minimizó estos videos señalando que parte de una campaña contra la Transformación. No obstante, reconoció que, en la frontera desde Comalapa hasta Motozintla, existen grupos de delincuencia organizada que se disputan el territorio. Además, mencionó que “pueden tener bases de apoyo” ya que “en algunas partes del país les entregan despensas”, pero también es posible que los pobladores hayan sido obligados a aplaudir, le pidió a la población “no dejarse someter” y no caer en actos ilegales.
- Ese mismo día unos 800 elementos del ejército y GN se desplazaron desde Comitán para apoyar con helicópteros al personal de la CFE en la reconexión de la energía eléctrica, y confirmar la eliminación de los bloqueos. Un día después se anunció que el operativo conjunto con gobierno del estado había aumentado a mil 500 elementos. Para el jueves 28 de septiembre se anunció la llegada de otros 800 elementos.
- El comandante de la Unidad de Operaciones para Montaña del Ejército de Guatemala, Alex Tuyuc informó que se movilizaron 300 soldados desde Tacaná hasta la frontera con Motozintla, con la intención de defender su territorio en caso de algún ataque de los



cárteles mexicanos que operan en el área de Motozintla, donde tienen presencia Los Huistas.

- El lunes 25 de septiembre continuaron los reportes de escasez de alimentos y gas LP en Motozintla y Mazapa de Madero, por bloqueos a la carretera que va a Huixtla. Estos bloqueos los realizaron los choferes del transporte público como protesta por las extorsiones.
- El martes 26 de septiembre alrededor de 10 mil personas, de las 45 comunidades de Siltepec y municipios aledaños, salieron a las calles para exigir mayor seguridad ante la disputa del territorio entre el CDS y el CJNG.
- El miércoles 27 de septiembre el presidente López Obrador presentó la Operación Frontera Comalapa que lleva a cabo la SEDENA donde señala que el comandante de la VII Región Militar con dos agrupamientos se trasladaría ese día vía terrestre a Motozintla para retirar posibles bloqueos. Para el jueves 28 de septiembre se anunció la normalización de las actividades en Frontera Comalapa.
- La tarde de ese día se difundió el video de un enfrentamiento entre el Ejército Mexicano y un grupo armado en Villaflores, Chiapas. Estos hechos están relacionados con el asesinato del comandante de la Policía Ministerial Federal, Uriel Bersaín, adscrito al municipio de Villaflores, ocurrido un día antes en la carretera Arriaga-Ocozocoautla.
- El sábado 30 de septiembre se reportó en fuentes abiertas un nuevo bloqueo por personas relacionadas con grupos criminales en la carretera Motozintla-Huixtla, a pesar de la presencia de más de 2,300 elementos de seguridad.

La presencia de los dos carteles mexicanos se combina con la existencia de grupos delincuenciales locales como Sentimientos de la Nación, el Cártel de San Juan Chamula (CSJC), los Motonetos, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), los Huistas y El Maíz (organización paramilitar Mano Izquierda, no confundirla con Movimiento Agrario Indígena Zapatista), que interactúan y se disputan el control de las actividades criminales, ya sea por su cuenta, o como brazos armados de los cárteles. Estos grupos delincuenciales han atacado poblaciones del EZLN, que ya han advertido que retomarán las armas como en 1994 si el gobierno federal no frena las agresiones en su contra.

Con la actual situación, existen elementos suficientes para inferir que hay altas probabilidades de que la violencia escale a niveles mayores, ya que ambos carteles tienen un poder de fuego considerable, aunado a que no tienen una delimitación de espacios de control, y que hay cientos de desplazados dominados por el temor y la desinformación a expensas de la acción delincriminal. El desafío para las fuerzas del orden es mayor, ya que han tenido que desplazar nuevas tropas en un territorio hostil, y donde tendrán que permanecer largo tiempo si quieren lograr efectos pacificadores de mediano plazo. Un reto para articular una verdadera estrategia de seguridad del Estado mexicano para combatir al crimen organizado en condiciones sociales tan desfavorables.



## Levantamiento de la alcaldesa de Cotija revela disputa territorial entre organizaciones criminales e intentos de cooptación de autoridades

### DINÁMICA CRIMINAL

El pasado sábado 23 de septiembre se informó del levantón de la alcaldesa del municipio de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, del Partido Acción Nacional. Ocurrió en el municipio de Zapopan, Jalisco, después de que ella saliera de un centro comercial y abordara un taxi, acompañada de dos mujeres. Una motocicleta le cerró el paso junto con un auto con personas armadas, que, después de confirmar la identidad de la alcaldesa, se la llevaron junto con uno de sus familiares. Tras tres días de incertidumbre, se informó que la alcaldesa había sido liberada en Mazamitla, Jalisco, y que iba en un camión rumbo a Zamora, Michoacán; miembros de la Guardia Nacional la interceptaron para acompañarla y protegerla. Aunque ya hay tres detenidos, las investigaciones están en curso.

Este evento ocurrió después de que se reportaran múltiples amenazas dirigidas a la alcaldesa en meses pasados provenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En abril, en el municipio gobernado por la alcaldesa, Cotija, se registró un enfrentamiento en la comandancia municipal entre policías municipales y hombres armados. Días después se presentaron múltiples vehículos blindados y sujetos armados en el palacio municipal, donde, después de desarmar a los policías municipales, solicitaron audiencia con la alcaldesa para informarle que, según ellos, por órdenes de José Alfredo Ortega Reyes, Secretario de Seguridad del estado, iban a destituir al Director de Seguridad Pública Municipal, Leo Báez, para sustituirlo por Orlando Nava Badillo. Leo Báez retomó su puesto dos días después. Después de estos hechos, la alcaldesa solicitó la presencia del ejército en el municipio.

A pesar de que Cotija es, comparado con el resto de los municipios en el estado, uno de los menos violentos, con 47 Víctimas Letales del Crimen Organizado (Morelia, Uruapan y Zamora son los más violentos), en los últimos meses se han registrado múltiples balaceras y enfrentamientos entre presuntos miembros de diferentes organizaciones criminales y con elementos de seguridad. Cabe mencionar que se trata de una región muy importante por su colindancia con Jalisco. Este y municipios aledaños están siendo fuertemente disputados por el CJNG y varios de sus rivales, entre ellos el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec, Cáteles Unidos y Los Viagra, aunque también hay conflictos con otras organizaciones, como Los Pájaro Sierra, que en un principio habían sido aliados del CJNG.

En este contexto de fuertes conflictos con diferentes organizaciones y en una región que resulta de vital importancia para el CJNG, es posible que estos intentos por cooptar y amenazar a la alcaldesa de Cotija se expliquen por la necesidad de hacer frente a las distintas disputas con el apoyo de autoridades locales o, en todo caso, mediante la imposición de sus fuerzas en la formalidad y legitimidad que proveen los cargos burocráticos, como el del Director de Seguridad Pública Municipal. Este último punto es importante porque no sólo da cuenta de una crisis de seguridad derivada de los conflictos entre criminales, sino que augu-

ra un aumento en la necesidad de estas organizaciones por cooptar autoridades e incluso convertirse ellos mismos en autoridades mediante su participación en las elecciones del siguiente año. Anticipamos casos similares de amenazas e intentos de cooptación de autoridades en los próximos meses en esta región e intentos por llegar al poder formal mediante las elecciones.

Por su parte, la alcaldesa de Cotija no ha anunciado si se mantendrá en el puesto o si renunciará, tampoco ha dado detalles al público (esa información está en manos de la Fiscalía estatal) de las conversaciones que sostuvo con sus captores que, dijo, eran jefes de la organización criminal que la plagió. Tampoco ha dado detalles sobre un posible cambio del titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, cualquier movimiento podría ser visto mal por la sociedad y las autoridades en la medida en la que podría significar un acuerdo para que la gente del CJNG asuma el mando, por lo que es poco probable.



## Supuesto intento de arresto de Jesús Alfredo Guzmán 'El Alfredillo' perfila detenciones de jefes operativos del Cártel de Sinaloa

### OPERATIVO DE SEGURIDAD

Si bien las autoridades no confirmaron un operativo para capturar al segundo hijo al mando de la facción de Los Chapitos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar "El Alfredillo", medios locales y fuentes extraoficiales registraron un intento de captura el pasado sábado 23 de septiembre. A la luz del día, elementos de la SEDENA realizaron un operativo al interior del fraccionamiento Alegranza, Culiacán, donde fueron capturadas dos personas. Según una versión difundida en redes, se trató de capturar al Alfredillo, quien presuntamente pudo escapar con ayuda de su equipo de seguridad. El operativo fue efectuado por la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército (además del empleo de un helicóptero). Otra versión apunta a que los dos detenidos eran personas colaboradoras con la facción de Ismael 'El Mayo Zambada'.

En todo caso, este operativo se inserta en una lógica de colaboración intensa, durante semanas recientes, de fuerzas federales con la estrategia de captura de líderes criminales del Cártel de Sinaloa, estipulada por la Fiscalía General de EE.UU. y la DEA. Debemos recordar que el fiscal general, Merrick Garland, afirmó que además de la extradición de Ovidio Guzmán, se darán extradiciones de otros jefes operativos y de los demás hijos de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo". Estimamos que los probables blancos, que podrían ser detenidos en el último trimestre del año, podrían ser los siguientes: Oscar Noé Medina González, acusado de tráfico de metanfetamina, cocaína y heroína; Carlos Omar Félix Gutiérrez, quien está involucrado en la operación de laboratorios clandestinos de fentanilo para el CDS; Liborio Núñez Aguirre, conocido como "El Karateca" ha sido vinculado al grupo "Los Chapitos"; Luis Javier Benítez Espinoza, traficante de fentanilo involucrado en el movimiento de grandes cantidades de fentanilo desde México a EE.UU. en forma de pastillas y polvo; y Alan Gabriel, un presunto traficante de fentanilo.



En la línea del operativo que supuestamente buscaba detener al “Alfredillo”, advertimos de operativos de seguridad que el gobierno mexicano desplegó el 30 de septiembre, en zonas del Triángulo Dorado, en el municipio serrano de Badiraguato. Se reportó un fuerte operativo con helicópteros, drones y aeronaves militares que sobrevolaron la zona, esto desde la región de San José del Barranco hasta la Tuna. Sin tener más información al respecto en fuentes abiertas, este operativo podría tratarse de una búsqueda de los demás líderes operativos que se ocultan en esta región serrana de Sinaloa.

Otra dinámica conectada con este operativo militar es un ataque ocurrido el 23 de septiembre pasado, en que un comando armado ingresó a la Clínica Hospital Culiacán para asesinar a dos presuntos heridos (de nombre Adrián y Luis) en un enfrentamiento en la sierra de Badiraguato. En el ataque murieron cuatro personas. Sin embargo, en otra versión se menciona que ese ataque buscaba asesinar a un presunto jefe de plaza de Los Chapitos conocido como “El 22.” Medios locales difundieron que este sujeto tuvo su funeral el pasado sábado, donde se reportaron coronas de flores a nombre de los tres hermanos, Alfredo, Iván y Ovidio.

Esperamos que estas líneas de investigación puedan esclarecerse en las próximas semanas. No obstante, advertimos que al interior de la facción de los Chapitos se perfila una división ante la extradición de Ovidio Guzmán y el avivamiento de la estrategia gubernamental por capturarlos. Como mencionamos en reportes anteriores, los líderes de los Chapitos estarían reduciendo los niveles de producción de pastillas de fentanilo para intentar mitigar las estrategias de seguridad en su contra. En esta línea, informantes locales advierten que entre Alfredo e Iván Guzmán hay un distanciamiento. De modo que esta dinámica podría implicar nuevos eventos violentos internos en el municipio de Badiraguato en el mediano plazo.



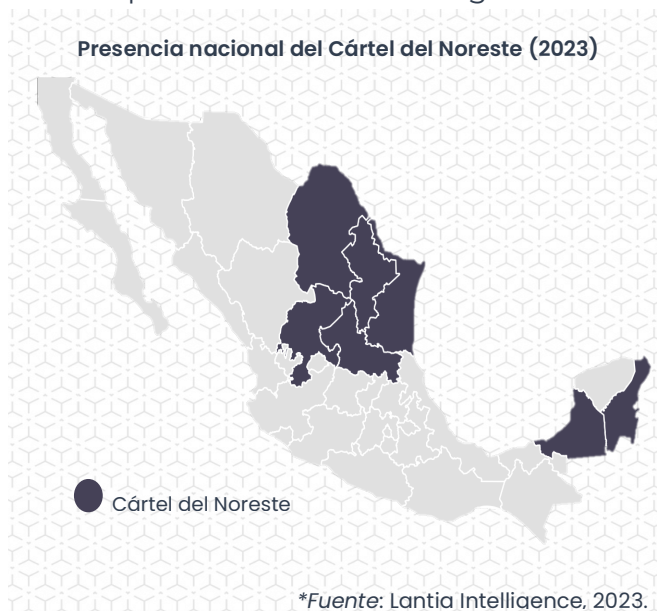
## Víctimas mutiladas en área metropolitana de Monterrey son consecuencia de la expansión del Cártel del Noreste en Nuevo León y de su confrontación con el Cártel de Sinaloa

### DINÁMICA CRIMINAL

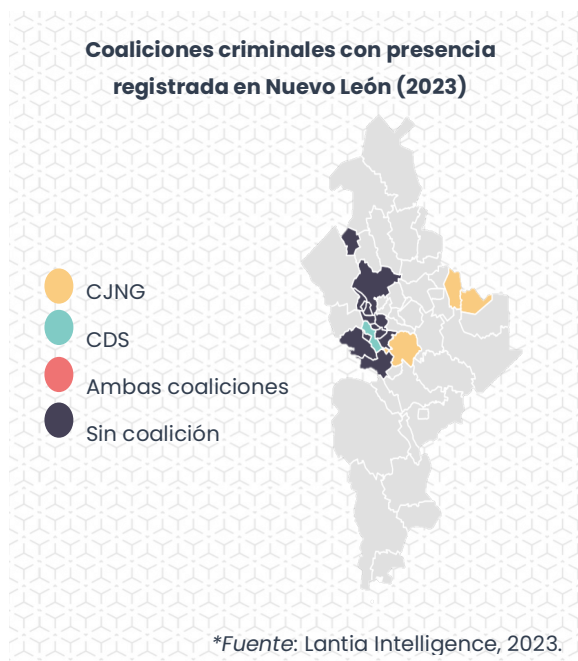
La semana pasada ocurrió una nueva oleada de violencia en Nuevo León. Al menos 12 cabezas humanas fueron halladas en la zona metropolitana de Monterrey, en las colonias de San Nicolás, Anáhuac, Escobedo, Santa Catarina, Hogares Ferrocarrileros, Valle de Santa Isabel y Bosques de San Miguel. Junto a los cuerpos mutilados (envueltos en bolsas o puestos en hieleras) se encontraron cartulinas con amenazas adjudicadas a la mafia Cártel del Noreste (CDN), según reportó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. En los mensajes que acompañaban a los cadáveres se exponía cómo las víctimas eran individuos que habían colaborado con el Cártel de Sinaloa (CDS) y Los Rodos (una banda local subordinada al CDS y respaldada por Ismael (a) “El Mayo” Zambada) y que compartieron información sobre la estructura del CDN a dos individuos: (a) “El Toro” y (a) “La Wera” del CDS, aparentemente encargados de distribuir droga en Juárez y Guadalupe, Nuevo León.

La mafia del CDN descubrió a los espías en sus filas y decidió eliminarlos de forma vistosa y cruel para disuadir a otros posibles traidores, así como para mostrarles a las organizaciones rivales que no tolerarán la presencia de actores infiltrados entre sus filas. Según informó el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Palacios Pámanes, estas muertes se enmarcan en la lucha en curso entre el CDS y la mafia del CDN por el control de Nuevo León y de la zona metropolitana de Monterrey. Las víctimas de la semana pasada son consecuencia de un proceso de “purga” interna, en la que la estructura directiva del CDN castigó la deslealtad de miembros que decidieron cooperar con la facción de Los Zambada del CDS.


Tras el hallazgo de las víctimas y la reacción de figuras de alto nivel en el gobierno federal, incluyendo al presidente López Obrador, la SEDENA movilizó a 100 elementos de la unidad de Fuerzas Especiales a Monterrey. Ésta es una medida que tendrá el objetivo de contener y neutralizar a los perpetradores de violencia en Nuevo León, y que seguramente buscará capturar a los miembros del CDN en respuesta a los reclamos de grupos de interés, como el sector empresarial local que reclama más seguridad, y que advierte que la violencia prolongada en el estado podría afectar nuevas inversiones por *nearshoring*. Sin embargo, el CDN no se quedará con los brazos cruzados: el CDN realizó desde el miércoles pasado una serie de acciones para frenar la proliferación de elementos de seguridad: bloqueos y quema de vehículos en las principales carreteras de Nuevo León, así como un incremento en los ataques a los policías municipales, estatales y elementos del ejército y la Guardia Nacional. Esto ocurrió en los límites de Hualahuises, Linares, Montemorelos y Doctor Arroyo. En consecuencia, alertamos del peligro que representarán en los siguientes días las carreteras de Monterrey, principalmente Linares-Iturbide, la Carretera Nacional y las ya conocidas autopistas con destino a Nuevo Laredo.



En los últimos días registramos el abatimiento de tres miembros del CDN y 11 detenidos, el decomiso de una serie de armas largas y de vehículos empleados por dicha mafia, así como el fracaso del CDN para obstaculizar la entrada de fuerzas federales a la zona metropolitana de Monterrey. Esta mafia, pese a que es capaz de adoptar tácticas altamente agresivas que heredó de Los Zetas, adolece de problemas de desorganización interna y operativa que le impiden frecuentemente alcanzar objetivos de consolidación y expansión territorial. Un ejemplo de lo anterior fue su fallido intento por expandirse hacia Nuevo León y Coahuila a inicios de 2023. El desorden en el despliegue de 40 sicarios del CDN desde Tamaulipas terminó con la detención de 30 individuos y el abatimiento de otros siete en Nuevo León, mientras que la expedición fallida desde Tamaulipas a Coahuila tampoco les dio buenos resultados. Además de las fuerzas del Estado, el CDN se enfrenta con organizaciones criminales más poderosas de presencia nacional, como ocurrió el 18 de septiembre, en el que un ataque de Los Guzmán del CDS en el norte de Nuevo León les obligó a replegarse.



Pese a las presiones que enfrenta el CDN por parte de fuerzas del Estado y de los ataques de organizaciones criminales (y que coadyuvan a explicar las reacciones violentas como las de esta semana) es improbable que esta mafia detenga su estrategia de expansión territorial en Nuevo León. La entidad regiomontana es muy atractiva, pues es uno de los polos de crecimiento más importantes del país, además de que es una zona estratégica de paso entre Ciudad Victoria y las ciudades de Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas. Monterrey representa un área de oportunidad para controlar los mercados transnacionales de narcóticos y migrantes hacia Estados Unidos. Por ello, y pese a que le tomará tiempo, el CDN está decidido a expandirse paulatinamente dentro de Nuevo León y acercarse, cada vez más, a la capital del estado. En las próximas semanas seguirá la disputa por Monterrey entre el CDN y otras organizaciones criminales como el CDS. Por ello, advertimos que a pesar de la redoblada presencia de fuerzas de seguridad, se incrementarán los episodios de violencia y de inestabilidad en la ciudad regiomontana con bajas tanto para las fuerzas armadas del Estado mexicano cuanto para los sicarios de las organizaciones criminales rivales.



## El secuestro de siete jóvenes en Zacatecas, y el asesinato de seis de ellos, afianza la hipótesis del reclutamiento de civiles por parte de grupos criminales, y exhibe de nuevo la violencia en la entidad

### RIESGO SOCIAL

El pasado 24 de septiembre, siete jóvenes de entre 14 y 18 años fueron secuestrados en el Rancho El Potrerito en la comunidad de Malpaso, municipio de Villanueva. El grupo se encontraba reunido en un inmueble a tan solo 500 metros de una unidad regional de seguridad de la policía estatal. Según testigos que se estaban en el lugar de los hechos y quienes no fueron lastimados, los jóvenes fueron levantados por un comando armado que vestía como policía estatal, que ingresó alrededor de las 4am. La desaparición fue reportada al día siguiente y se desplegó un grupo de 300 elementos del Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional para realizar una búsqueda en los lugares circundantes. Un vehículo donde fueron levantados fue encontrado ese mismo día sin más pistas sobre los secuestrados, por lo que el 26 de septiembre, familiares de los jóvenes se manifestaron con un bloqueo de nueve horas en la carretera a Malpaso, y denunciaron que la búsqueda fue restringida y no se extendió a las zonas montañosas cercanas.

El 27 de septiembre, el fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó que dos jóvenes de 15 y 16 años que portaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro, y que incluso ya habían sido reconocidos por testigos. Después se logró la detención de dos hombres y una mujer en el municipio de Villanueva, quienes presuntamente también estarían involucrados. Según información del fiscal, los menores de edad dieron la ubicación de los desaparecidos y confesaron haber estado reunidos con ellos cuando fueron levantados supuestamente por estar involucrados con el narcomenudeo.

Ese mismo día, los jóvenes fueron encontrados en una zona serrana de difícil acceso en la comunidad de La Soledad en Villanueva, que conecta con el estado de Jalisco. Seis de ellos sin vida. El único sobreviviente presentaba golpes y fue trasladado al hospital. Los familiares reconocieron los cuerpos, pero las autoridades los registraron como desconocidos, mientras tanto la Fiscalía estatal aseguró que las familias eran atendidas por personal especializado en psicología y trabajo social durante el proceso formal del reconocimiento de los cadáveres.

Uno de los padres indicó que les fue enviado un video para pedir rescate por los desaparecidos. En éste se observa a seis de los jóvenes caminando con las manos atadas a la espalda mientras son guiados por sujetos armados. La madre de otra de las víctimas indicó en una entrevista, que ese video solamente fue entregado a dos de las familias a las que les pidieron un rescate de entre 15 y 20 mil pesos, pero que no se volvieron a poner en contacto con ellos. Asimismo, dijo que los familiares de los otros jóvenes vieron el video hasta que fue publicado en redes sociales.

Igualmente, padres de familia declararon a los medios de comunicación que la Fiscalía del estado no los ayudó en su momento, aun cuando ellos les entregaron información para ubicarlos (presumimos que entre las pruebas estaba el video), y rechazaron que hayan recibido apoyo por parte de las autoridades, quienes inclusive les señalaron que tendrían que trasladarse a la capital estatal para reunirse con el fiscal porque éste no tenía tiempo para atenderlos, y que hasta el momento el gobernador David Monreal no se ha involucrado en el caso.

Habitantes de la zona declararon que ésta no es la primera vez que ocurre una desaparición, sino que los levantamientos ya se han convertido en algo común. Y que, a pesar del aumento del número de elementos de seguridad en el estado, no se observan resultados positivos, pues no se da una rápida respuesta a las llamadas de emergencia, e incluso estas denuncias son ignoradas en ocasiones. Vecinos del rancho El Potrerito dijeron que los elementos que se encontraban en la unidad regional de seguridad de la policía estatal debieron escuchar los balazos cuando los jóvenes fueron levantados, pero nunca aparecieron en el lugar.

Y aunque en un principio, la Fiscalía del estado declaró que se tenían reportes de levantamientos, Murillo Ruiseco negó que este caso tuviera relación con este delito: “Sobre el reclutamiento forzado hemos identificado dos modus operandi, sobre todo en Jalisco y Durango, en donde se les oferta aparentemente trabajo a través de redes sociales ... pero particularmente en este último de los jóvenes de Villanueva descartamos que sea reclutamiento”.

Cabe destacar que apenas en agosto, un caso similar ocurrió en Lagos de Moreno, Jalisco, que se encuentra aproximadamente a tres horas de Villanueva, Zacatecas, por lo que no se descarta que este crimen responda a la disputa entre el Cártel de Sinaloa que busca proteger su territorio ante la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación. Además, existen otros grupos criminales en el estado que también buscan aprovechar la zona, principalmente por la presencia de compañías mineras en el estado; por ejemplo, en Villanueva existen zonas de vetas de fluorita, plomo, plata, zinc y cobre, según datos de la Secretaría de Economía (2011).

Por su parte, el jueves 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no había que adelantarse a los hechos y se tenía que esperar a que el único sobreviviente diera más información pues ya estaba declarando. En algunas notas informativas publicadas ese mismo día se dice que el joven confesó a su madre no estar relacionado con ningún delito, pero otros medios de comunicación publicaron que el joven estaba sedado por lo que no había tenido oportunidad de informar o dar alguna pista de quiénes fueron los perpetradores y el probable móvil. Hasta el momento, las autoridades no han dado más información, ni las personas que estaban con los jóvenes en el momento del secuestro han declarado públicamente conocer a los adolescentes detenidos que declararon estar presentes durante el secuestro.

El reiterado secuestro de hombres jóvenes en estas zonas podría ratificar la teoría de un “reclutamiento forzado” por parte del crimen organizado, ante la baja de sus propios elemen-



tos durante los enfrentamientos armados, así como para ser utilizados como “halcones” o integrantes no especializados, cuyo asesinato no representaría una gran pérdida entre sus integrantes. Además, el reclutamiento de menores de edad también podría ser beneficioso para los criminales ya que en caso de arresto, las penas son reducidas comparadas con las aplicadas a adultos, y una vez liberados los jóvenes se reintegrarían a sus filas (una vez dentro de las organizaciones criminales los jóvenes tienen pocas opciones de salida).

Si la hipótesis del reclutamiento forzado fuera la certera estaríamos ante una ola de violencia en donde el trabajo de las autoridades no ha logrado ser eficiente, no solamente en Zacatecas sino en estados vecinos, lo que mantiene a la población civil expuesta a más peligros. Hasta el día de hoy siguen surgiendo casos de levantones de dos o más jóvenes, lo que intensifica el miedo y vulnerabilidad de la población civil.

La entidad es un punto geográfico estratégico para las organizaciones criminales que buscan llegar a la frontera por las carreteras federales 23, 45, 49 y 54, las cuales conectan al estado con otros puntos de importancia para el trasiego de drogas como Colima, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que difícilmente será considerada intrascendente para las actividades de cualquiera de los carteles, que además han encontrado poca o nula eficiencia en el trabajo de los cuerpos de seguridad para extenderse por el territorio zacatecano, por lo que no esperamos una disminución de la violencia en el corto y mediano plazos, aunque se sigan enviando más elementos de seguridad a la zona.

## Tabasco está en riesgo de una crisis prolongada de inseguridad por pasadas omisiones e incapacidad actual de las autoridades

### RIESGO DE SEGURIDAD

La mañana del viernes 22 de septiembre fue detenido en un operativo en el que participó la SEDENA y Guardia Nacional Salvador González (a) “El Topo”, un presunto líder criminal al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Como respuesta, otros de sus colaboradores criminales efectuaron una serie de agresiones, bloqueos y enfrentamientos en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco. Uno de los incidentes más relevantes de represalia fue el rafagueo del domicilio y vehículo del coordinador Municipal de Protección Civil.

- Aparentemente, “El Topo” trabajó durante varios años como custodio en un centro penitenciario de Tabasco, pero aprovechó la oferta de miembros del CJNG para liberarlos y trabajar con ellos (él fue quien liberó a cuatro internos del CERESO Las Palmas de Cárdenas el 11 de marzo). El apoyo que brindó a los internos evadidos le permitió escalar rangos al interior del CJNG rápidamente y constituirse como un influyente jefe criminal en la zona.

Si bien no hubo reportes de víctimas letales por los incidentes de violencia, se reportó la suspensión de actividades en escuelas de esos municipios (por ejemplo, el Colegio de Bachilleres no. 31 y la Universidad Popular de la Chontalpa). Asimismo, se identificó que personas

que se encontraban en las inmediaciones de algunos de estos hechos efectuaron rapiña de algunos de los vehículos que fueron tomados por los criminales.

La crisis de seguridad en Tabasco se ha acentuado por la importancia del estado en el tránsito de miembros del CJNG y del Cártel de Sinaloa (que introducen droga y migrantes por la frontera sur de Chiapas y por el municipio de Tenosique). Sin embargo, otro factor que ha contribuido a la creciente inestabilidad de Tabasco es la decisión de autoridades estatales de ocultar la situación de seguridad.

- Durante años, autoridades estatales encubrieron los incidentes de violencia y la presencia criminal en un intento de mantener la imagen positiva en el contexto de la construcción de la refinería Dos Bocas. Sin embargo, esta decisión también permitió el avance de organizaciones criminales (CJNG y Cártel de Sinaloa), pues este encubrimiento también implicó no efectuar operativos en su contra.

A menos de que se registre un cambio radical en la estrategia durante el cuatro trimestre del año, es probable que Tabasco haga frente a una crisis prolongada de violencia criminal (como a la que actualmente hace frente Chiapas). Sin embargo, es importante destacar que una crisis de violencia en Tabasco tendría un mayor impacto, pues el estado es estratégico en diversas industrias, especialmente la energética.



## Puebla muestra una tendencia general de deterioro en indicadores de seguridad pública, pues solo en el 18% de los 61 indicadores revisados se registra una tendencia a la baja para 2023

### ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

Lantia Intelligence presenta un análisis de los principales indicadores de seguridad pública para Puebla de los resultados y datos disponibles de 2014 a 2023. Los principales hallazgos muestran lo siguiente:

- De 2014 a 2023 el porcentaje de la población que indicó tener mucha o algo de confianza en las instituciones de seguridad muestra una tendencia al alza. En 2014 el mayor porcentaje reportado fue de 29.8% para la policía de tránsito, y aunque se mantiene como una de las autoridades con menor porcentaje en el periodo analizado, aumentó a 44.4% en 2023. Por otra parte, en 2023 el mayor porcentaje de confianza fue para la policía estatal con el 62.3%; dicha institución se ha mantenido como la de mayor confianza en los últimos 10 años. Por otra parte, la policía ministerial o judicial tuvo el mayor aumento de 2014 a 2023, pues de 32.0% subió al 59.3%, lo que implica un crecimiento de 27.2 puntos porcentuales.
- El porcentaje de la población que señaló tener una percepción sobre el desempeño de las autoridades como muy o algo efectivo mostró una tendencia al alza o mejora de 2014 a 2021, mientras que en 2022 y 2023 se han observado disminuciones. A pesar de las disminuciones, el nivel de percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad

locales o estatales en 2023 es superior al registrado en 2014. Por otra parte, la policía ministerial o judicial mostró la mayor mejoría en los últimos 10 años, pues subió de 39.4% a 58.0%, lo que implica un crecimiento de 18.6 puntos porcentuales. La policía de tránsito, la institución que se percibe como la de menor desempeño en comparación con el resto de las instituciones, había mostrado una mejora de 9.4 puntos porcentuales de 2014 a 2021 (subió de 35.4% a 44.8%), pero para 2023 bajó en 6.5 puntos porcentuales quedando en niveles ligeramente por arriba de los registrados de 2015 a 2017. En cuanto a la policía estatal, institución con la mayor percepción de desempeño en el periodo analizado, subió de 48.9% en 2014 a 60.9% en 2021, aunque bajó 3.8 puntos porcentuales para 2023.

- Entre los resultados de la entidad sobre la prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la ENVIPE destacan los siguientes:
  - Los delitos con los mayores niveles de incidencia son robo total o parcial de vehículo (con 7,895 robos por cada 100 mil habitantes en promedio al año), robo o asalto en calle o transporte público (7,864), extorsión (5,368), robo en casa habitación (4,469), y fraude (3,493).
  - El fraude muestra una tendencia al alza (pues de 3,079 por cada 100 mil habitantes en 2014 sube a 4,357 en 2022), mientras que el resto de los delitos muestra una tendencia a la baja o estable. En cuanto al total de delitos, se observa un importante aumento de 23,741 en 2014 a 31,834 en 2017, aunque a partir de 2018 ha mantenido una tendencia a la baja hasta llegar a los 25,090 delitos en 2022, dicha cifra aún se encuentra por arriba de lo registrado hace 10 años.
  - Los delitos que registran una disminución de 2021 a 2022 son los siguientes: amenazas verbales (2.8%), fraude (16.6%), lesiones (30.6%), robo en casa habitación (30.5%), robo o asalto en calle o transporte público (9.1%), robo total o parcial de vehículo (19.3%), y en el total de delitos (4.0%). El resto de los delitos analizados muestran aumentos del 2.4% (extorsión) y 17.1% (otro tipo de delitos diferentes a los mencionados).
  - El porcentaje de la población con percepción de inseguridad en Puebla es del 79.1% al año en promedio, pero muestra una tendencia a la baja a partir de 2020, pues de 89.9% bajó a 79.3% en 2023.
- En cuanto a indicadores relacionados con la violencia del crimen organizado y la conflictividad social sobresale lo siguiente:
  - El número de víctimas letales del crimen organizado registra una tendencia a la baja a partir de 2020, pues de 577 víctimas en 2019 bajaron a 488 en 2022, y estimamos que 2023 podría finalizar con una disminución anual del 21.5% con 383 víctimas.
  - De los incidentes de conflictividad los únicos que reflejan una tendencia al alza son las movilizaciones o marchas y trata de personas, donde 2022 fue el año de mayor

incidencia para ambos tipos de eventos. Por otra parte, se estima que los siguientes tipos de eventos tendrán un aumento al terminar 2023: alto perfil (homicidio, intento de homicidio o secuestro de actores con influencia en la región), balaceras, bloqueos en vías de comunicación, y rafagueos. En tanto que los eventos de conflictividad que se estima tendrán una disminución son los incendios provocados, levantamientos (secuestros no económicos), linchamientos, movilizaciones o marchas, robo en carreteras, y trata de personas.

- El número de desapariciones muestra un comportamiento atípico (pues de 2016 a 2019 había registrado un promedio anual de 238 desapariciones, para los siguientes años este promedió cayó a 42 desapariciones al año), aunque al final se refleja una tendencia al alza. El número de hombres desaparecidos sube de 59 reportados en 2014 a 129 registrados en 2019, y se estima que 2023 finalizaría con 242, lo que representa un aumento del 87.6%. En cuanto a mujeres desaparecidas, de 57 registradas en 2014 subió a 179 para 2023, lo que implica un aumento del 214%.
- En cuanto al número de carpetas de investigación identificamos lo siguiente:
  - El total de carpetas tiene una tendencia al alza, sube de 61,949 en 2014 a 73,741 en 2022, y se estima un aumento del 5.6% para 2023 con 78,062.
  - Los delitos que muestran una tendencia al alza y que se estima tendrán un aumento de 2022 a 2023 son los siguientes: robo a casa habitación, robo a institución bancaria, robo a transeúnte, robo a transportista, robo de autopartes, robo de vehículo automotor, robo en transporte individual, robo en transporte público colectivo, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, violencia familiar, corrupción de menores, trata de personas, feminicidio, amenazas, falsedad, delitos contra la libertad y la seguridad sexual (delitos sexuales), y en el total de delitos.
  - Los delitos que muestran una tendencia al alza, aunque se estima que cerrarán 2023 con una disminución son los siguientes: abuso de confianza, daño a la propiedad, despojo, fraude, robo a negocio, homicidio doloso, lesiones dolosas, allanamiento de morada, delitos contra el medio ambiente, delitos cometidos por servidores públicos, falsificación, y narcomenudeo.
  - Los delitos que tienen una tendencia a la baja o estable (ni al alza ni a la baja) pero que para 2023 se estima tendrán un aumento son los siguientes: extorsión, robo en transporte público individual, y aborto.
  - Los delitos que tienen una tendencia a la baja o estable (ni al alza ni a la baja) y que para 2023 se estima tendrán un decremento son los siguientes: homicidio culposo, lesiones culposas, delitos electorales, evasión de presos, y delitos contra la libertad personal (secuestro y otros).





### Principales indicadores de seguridad en Puebla

Indicadores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tendencia
<b>% Población que tiene mucha o algo de confianza en instituciones de seguridad pública</b>											
Ministerio Público (MP) y Procuradurías Estatales	35.2	39.6	46.3	54.6	56.3	53.9	50.5	63.1	54.8	56.1	
Policía de Tránsito	29.8	27.1	44.2	44.9	39.9	44.1	40.2	49.1	44.7	44.4	
Policía Estatal	41.7	40.3	60.2	59.5	59.8	60.1	57.2	66.3	66.2	62.3	
Policía Ministerial o Judicial	32.0	37.3	48.2	51.0	52.2	53.1	60.0	66.1	55.2	59.3	
<b>% Población con percepción de muy o algo efectivo el desempeño de las instituciones de seguridad pública</b>											
Ministerio Público (MP) y Procuradurías Estatales	39.2	45.5	41.2	46.6	50.0	43.2	40.9	59.2	53.1	49.8	
Policía de Tránsito	35.4	38.1	38.1	38.1	35.2	35.1	32.5	44.8	41.1	38.3	
Policía Estatal	48.9	47.7	50.1	52.5	53.5	53.0	53.2	60.9	60.6	57.0	
Policía Ministerial o Judicial	39.4	46.4	46.6	49.1	53.3	49.2	47.1	62.8	61.4	58.0	
<b>Prevalencia por cada 100 mil habitantes</b>											
Amenazas verbales	2,578	1,498	1,935	2,728	1,534	2,209	2,017	2,526	2,455		
Extorsión	6,145	4,784	6,242	7,062	5,301	4,066	4,409	5,092	5,215		
Fraude	3,079	2,497	2,708	2,974	3,120	3,029	4,448	5,226	4,357		
Lesiones	728	955	659	1,216	736	902	511	870	604		
Robo en casa habitación	4,805	4,139	4,476	6,933	5,675	3,403	3,298	4,421	3,072		
Robo en forma distinta a las anteriores	362	961	465	1,028	860	797	710	1,064	1,231		
Robo o asalto en calle o transporte público	6,309	6,224	7,625	9,654	9,604	8,282	8,505	7,634	6,938		
Robo total o parcial de vehículo	7,834	7,458	7,696	9,028	9,521	8,023	7,207	8,356	6,746		
Otros delitos distintos a los anteriores	900	778	813	1,306	1,113	1,641	1,014	1,665	1,950		
Total	23,741	22,959	25,502	31,834	29,576	25,381	25,149	26,139	25,090		
<b>% Población percibe inseguro su estado</b>											
Percepción de Inseguridad	66.0	71.5	71.8	71.2	83.3	89.5	89.9	88.0	81.0	79.3	

Fuente: ENVIPE-INEGI, 2014 a 2023.



### Principales indicadores de seguridad en Puebla

Indicadores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tendencia
<b>Número de víctimas letales del crimen organizado*</b>											
VLCO	115	125	358	381	512	577	502	362	488	383	
<b>Número de eventos*</b>											
Alto Perfil	5	23	24	33	79	82	52	25	29	36	
Balacera	0	6	25	66	108	61	36	23	23	36	
Bloqueos en vías de comunicación	1	4	5	10	33	20	13	13	10	17	
Incendios provocados	1	9	15	12	37	25	21	8	6	5	
Levantamientos-secuestros no	1	2	5	18	28	36	20	7	15	11	
Linchamientos	5	24	33	40	114	81	63	39	28	11	
Movilizaciones-marchas	4	11	14	14	34	14	39	26	54	36	
Rafagueos	1	4	20	35	104	77	60	30	54	68	
Robo en carreteras	0	7	8	48	136	65	26	22	30	24	
Trata de personas	3	5	8	3	8	7	1	18	34	11	
<b>Número de personas desaparecidas*</b>											
Hombre	59	55	162	116	173	129	29	37	16	242	
Mujer	57	47	122	105	100	45	13	13	19	179	
Total	116	102	284	221	273	174	42	50	35	422	

Fuente: Lantia Intelligence, 2023; RNPDO, 2023. Nota (\*): Cifra 2023 corresponde a una estimación anual con base a datos disponibles de enero a agosto.

# Principales indicadores de seguridad en Puebla

Indicadores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tendencia
Número de carpetas de investigación*											
Abuso de confianza		1,271	693	770	731	1,409	999	1,546	1,512	1,377	
Daño a la propiedad		4,366	2,228	796	1,059	3,221	2,734	4,325	4,307	3,918	
Despojo		1,394	853	935	885	1,354	1,395	1,822	1,645	1,320	
Extorsión		273	122	115	168	192	145	117	126	131	
Fraude		4,227	2,852	2,446	2,302	3,153	2,693	4,769	4,815	4,565	
Robo a casa habitación		2,610	2,098	2,459	2,204	2,652	2,130	2,460	2,537	2,624	
Robo a institución bancaria		5	4	13	16	24	32	8	10	11	
Robo a negocio		2,106	2,075	4,680	4,443	5,113	3,772	3,774	4,577	4,449	
Robo a transeúnte		1,967	1,225	1,824	1,688	2,730	2,123	3,674	4,137	4,337	
Robo a transportista		414	801	1,658	2,737	2,127	966	1,120	1,801	2,670	
Robo de autopartes		575	287	326	276	514	304	1,180	1,051	1,407	
Robo de vehículo automotor		3,652	5,316	11,314	13,860	13,401	10,025	7,922	7,733	8,435	
Robo en transporte individual		1,100	657	700	615	1,117	693	1,399	1,360	1,485	
Robo en transporte público colectivo		313	203	418	314	394	206	431	489	872	
Robo en transporte público individual		281	145	202	190	185	99	122	121	137	
Incumplimiento de obligaciones de		11	14	17	29	33	273	291	294	353	
Violencia familiar		5,024	5,586	6,327	7,296	9,077	9,124	8,717	8,191	9,041	
Corrupción de menores		41	32	26	19	44	25	30	30	42	
Trata de personas		93	18	18	11	17	13	49	38	78	

Fuente: SESNSP, 2023. Nota (\*): Cifra 2023 corresponde a una estimación anual con base a datos disponibles de enero a agosto.

# Principales indicadores de seguridad en Puebla

Indicadores	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tendencia
Número de carpetas de investigación*											
Aborto		7	13	9	5	4	6	5	1	2	
Feminicidio		6	12	27	32	57	52	37	20	32	
Homicidio culposo		713	625	753	878	555	394	374	455	366	
Homicidio doloso		493	581	894	1,105	1,109	872	797	912	866	
Lesiones culposas		2,197	1,208	478	388	910	777	1,028	1,165	986	
Lesiones dolosas		6,871	4,264	2,165	2,426	5,363	4,542	5,681	5,669	5,607	
Allanamiento de morada		370	210	140	134	334	384	405	374	257	
Amenazas		4,401	2,054	549	809	4,333	4,161	5,784	5,638	5,753	
Contra el medio ambiente		20	12	24	19	28	60	27	33	21	
Delitos cometidos por servidores públicos		42	41	51	64	671	1,159	1,202	1,428	966	
Electorales		9	13	3	302	73	17	150	31	14	
Evasión de presos		13	7	4	3	7	3	4	8	3	
Falsedad		151	105	84	74	79	72	128	140	183	
Falsificación		585	301	185	230	291	300	417	496	462	
Narcomenudeo		3,133	518	713	253	484	1,273	1,740	2,435	1,994	
La libertad y la seguridad sexual (delitos sexuales)		1,433	1,322	1,252	1,742	2,376	2,521	3,200	3,132	3,609	
Libertad personal (secuestro y otros)		1,017	768	672	731	769	271	272	233	213	
Total		61,949	48,971	51,876	58,699	73,411	60,795	71,669	73,741	78,062	

Fuente: SESNSP, 2023. Nota (\*): Cifra 2023 corresponde a una estimación anual con base a datos disponibles de enero a agosto.